

La OCDE considera que se necesita avanzar más en rediseñar y reducir las políticas de apoyo a la agricultura

En el informe sobre "Seguimiento y Evaluación de la Política Agraria" que publica anualmente se refleja que los apoyos ascienden a una media de 556.000 M€/año.

 **AGROPECUARIO** | AYUDAS Y SUBVENCIONES

 ORG. INTERNACIONALES | OCDE

06.07.2018

La OCDE publicó el pasado 26 de junio su informe anual sobre "Seguimiento y Evaluación de la Política Agraria 2018" que evalúa el apoyo a los agricultores de 51 países en el periodo 2015-17. Los 51 países incluyen los 35 miembros de la OCDE, los 6 países de la UE que no son miembros de la OCDE (Bulgaria, Chipre, Croacia, Lituania, Malta y Rumanía), así como diez Economías Emergentes (Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Kazajistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam).

El informe refleja que las políticas agrarias de estos países representaron unas ayudas anuales de 556.000 M€, que constituyen el 15% de los ingresos de las explotaciones agrarias. El 75% de estas ayudas se concedió a productores individuales y sólo un 14% se destinó a financiar servicios de interés general como la investigación y su desarrollo o las infraestructuras.

La OCDE considera que las dos terceras partes de estos apoyos distorsionan sensiblemente las decisiones empresariales de los agricultores, aunque las diferencias entre grupos de países son importantes (en Economías Emergentes cerca del 80% de las ayudas que conceden distorsionan el comercio y la producción, mientras que en la UE este tipo de ayudas se sitúa por debajo del 25%). Estima además que estas políticas todavía no están suficientemente alineadas con los necesarios objetivos de incremento de productividad de forma sostenible, mejora de la resiliencia de las explotaciones ante los riesgos climáticos y de mercado y respeto al medio ambiente. En este sentido, recomienda una separación clara y urgente de las medidas que proporcionan apoyo a los ingresos de las explotaciones de aquellas dirigidas a la productividad, sostenibilidad y resiliencia.

Siguiendo con las recomendaciones, indica que el primer paso debe ser la eliminación de los apoyos que distorsionan el comercio y la producción para redirigirlos, para proporcionar servicios públicos que beneficien a productores, consumidores y a la sociedad en su conjunto.

La investigación, la innovación y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) deben jugar un papel importante en las políticas futuras.

En lo que se refiere a los objetivos medioambientales y de cambio climático, la información y el conocimiento deben ser la base para poder mejorar la política medioambiental, a través del establecimiento y seguimiento de indicadores.

En cuanto a las políticas de gestión de riesgos, proporcionar información a los agricultores es también necesario así como diferenciar claramente los 3 niveles de riesgos que define la OCDE: los que entran dentro de la habitual actividad empresarial (que deben ser gestionados por los agricultores), los riesgos mayores que se pueden resolver con soluciones de mercado (como mercados de futuro o seguros) y riesgos poco habituales ligados a catástrofes que implican la intervención pública.

Por otra parte, la OCDE considera que en muchos casos no se conoce la situación financiera de las explotaciones, lo que hace que los instrumentos de apoyo a la renta no estén debidamente adaptados, lo que requiere igualmente una mayor información.

Por último, la OCDE recomienda que las políticas agrarias se diseñen coherentemente, de forma que las medidas constituyan un único paquete que alcance los objetivos de forma complementaria. Las políticas deben ser coherentes entre sí internamente en los países pero también a nivel internacional.

